

OFICIO

N/REF: Expediente: 00001-00077610

FECHA: Fecha de firma electrónica

ASUNTO: Procedimiento autorización producto fitosanitario Hormonal D-60

DESTINATARIO:

Con fecha 6 de marzo de 2023, tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia (**UIT**) del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (**MAPA**), la solicitud de acceso a información pública presentada al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (**LTAIPBG**), por perteneciente al despacho de abogados **Fieldfisher LLP**, en representación del grupo **THE EUROPEAN UNION 2,4-D TASK FORCE 2012**, compuesto por las empresas, Dow Agrosciences B.V. (en la actualidad, Corteva Agriscience), Nufarm GmbH & Co KG y Adama Manufacturing Poland S.A., (la "Task Force"), que quedó registrada con el número **00001-00077610**.

Se solicitó la siguiente información:

"1. El oficio o comunicación emitida durante el procedimiento de autorización del producto fitosanitario Hormonal D-60 (ES-00092), por el que se admitió la solicitud de autorización presentada por el titular Probelte S.A.U., de conformidad con el segundo párrafo del artículo 7.3 del Real Decreto 971/2014 y se procedió a realizar la evaluación del Producto.

2. Alternativamente, cualquier otro documento, comunicación o referencia en la que figure la fecha en la que se admitió la solicitud de autorización del producto y comenzó la evaluación de la misma."

Analizada la solicitud, esta Dirección General considera que procede **denegar** la información solicitada en aplicación de lo previsto en el artículo **14.1, letras k) y h)**, de **LTAIBG** alusivos respectivamente, a la **garantía de la confidencialidad** o el secreto requerido en procesos de toma de decisión y a los **intereses económicos y comerciales**, con los detalles que se explican a continuación:

La información solicitada es confidencial por formar parte de un procedimiento de autorización de un producto fitosanitario (regulado por el Reglamento (CE) nº 1107/2009



del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo). Asimismo, el artículo 36.1 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal, regula dicha confidencialidad.

Por tanto, la información solicitada está sujeta a protección de datos y confidencialidad al amparo del Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, y de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre.

Por otra parte, la motivación indicada en la solicitud planteada por el grupo THE EUROPEAN UNION 2,4-D TASK FORCE 2012 es la de conocer las condiciones en las cuales se procedió a la autorización del producto fitosanitario Hormonal D-60 (ES-00092), por lo que afecta de manera clara a los intereses comerciales de la compañía Probelte SAU, solicitante de la citada autorización.

Existiendo estos intereses legítimos por parte de terceros, la aplicación de los límites al acceso a la información pública previstos en el artículo 14 de la LTAIPBG, exige ponderar, en el caso concreto, el daño que podría causarse a dichos intereses o derechos legítimos y la prevalencia del interés público en el acceso a dicha información. Por tanto, exige hacer un doble examen: del daño y de la importancia del interés público en el ejercicio del derecho al acceso a cierta información tal y como indica el Criterio Interpretativo 1/2009 del CTBG.

Con respecto al Test del daño, el contenido de la información solicitada tiene una incidencia evidente en cuestiones de naturaleza económica y comercial para la empresa que ha obtenido la autorización, y que incluyen datos que si fueran difundidos al público general devendría sin duda en un detrimento de la posición competitiva y negociadora de la entidad que ha obtenido la autorización a sus competidores. Entre el daño que se les causaría y la desvelación de dicha información por parte de la Administración, tendría un nexo causal directo, puesto que de ninguna otra forma podrían obtener esa información los solicitantes.

En segundo lugar, respecto al Test del interés público al conocimiento invocado por parte de los solicitantes, siguiendo las indicaciones que hace el propio CTBG en su citado criterio (páginas 21 y 22) podremos concluir que no concurre en el caso concreto ninguna de las circunstancias que según el CTBG supondría aceptar la existencia de un interés público al acceso de la información. Asimismo, se aprecian motivos de los que cabría deducir la poca relevancia del interés público en el conocimiento de dicha información, y ello por lo siguiente:

- Los argumentos a favor del interés público tienen un carácter general y no específico respecto del límite cuya aplicación se va a ponderar.
- Existe un riesgo de restricción de la competencia.

www.mapa.gob.es

Avenida Infanta Isabel 1. 28071 Madrid



La valoración en el test del interés público cuando se alegan intereses económicos y comerciales también sería negativa respecto los siguientes elementos valorados:

- “La rendición de cuentas del gasto de dinero público. Existe claramente un interés público en conocer cómo se toman las decisiones en las políticas públicas y en cómo se gasta el dinero público en cada caso concreto”. En este caso no cabe apreciarse un interés en el control del gasto del dinero público puesto que el procedimiento administrativo afectado no tiene por objeto la realización de un gasto.
- “La protección del público. La sociedad tiene interés en conocer cuándo existen prácticas empresariales o comerciales dudosas por parte de organizaciones o empresas, o cuando existen productos puestos en el mercado que resultan peligros o dañinos”. No puede apreciarse daño ni para el mercado ni para la salud, ni medioambiente, ni para ningún otro bien jurídico público, al tratarse de un procedimiento reglado de autorización.
- “Las circunstancias en las que la información fue obtenida por la administración pública. Si la obtención de la información procede de una obligación legal, si la misma fue aportada voluntariamente por la organización, si es fruto de una actividad de inspección y control por parte de la Administración, todas estas circunstancias influyen a la hora de proceder o no a la divulgación de la información”. Se trata de información presentada voluntariamente por la entidad en el procedimiento de autorización del producto, y, por tanto, información que no debería hacerse pública, y no debería perjudicar a los interesados.
- “Los aspectos relativos a la competencia. En economías de mercado como la española, existe un interés público en que las empresas puedan operar en un marco seguro de competencia, tanto si tal competencia tiene lugar en el ámbito ordinario de la actividad económica del país, como en el marco de la contratación pública”. La revelación de dicha información podría afectar efectivamente al régimen de libre competencia.

En conclusión, no existe un interés público real en el conocimiento de la información solicitada y por otro lado hay un perjuicio real a unos derechos e intereses privados que deben protegerse. Se trata de información susceptible de estar afectada por el secreto comercial debido a su carácter confidencial cuyo acceso por parte de terceros es susceptible de afectar a los intereses económicos y comerciales de una empresa. La comunicación de la información solicitada causaría de modo directo un perjuicio real y efectivo a los intereses económicos y comerciales de la entidad afectada por cuanto revelaría a sus competidores datos valiosos que pueden utilizar en su beneficio y en detrimento de su posición.



Los fundamentos de derecho en aplicación son los siguientes:

- I. La base normativa empleada para la evaluación del producto fitosanitario Hormonal D-60 fue el Reglamento (CE) nº 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009.
- II. Los artículos 59 y 63 de dicho Reglamento regulan la protección de datos y la confidencialidad de la documentación evaluada al amparo de la mencionada normativa.
- III. El artículo 36.1 de la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal regula la confidencialidad y la protección de datos de los procedimientos de evaluación de productos fitosanitarios.
- IV. El artículo 14.1.h) de la LTAIBG, establece como límite al derecho de acceso a la información, cuando este pueda suponer un perjuicio a los intereses económicos y comerciales de terceros.
- V. El artículo 14.1.k) de la LTAIBG, establece como límite al derecho de acceso a la información, cuando este pueda suponer un perjuicio a la garantía de confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.

En el presente caso, esta Dirección General considera que la información no puede ser proporcionada al solicitante, puesto que esta documentación debe ser tratada de modo confidencial.

Y adicionalmente, se considera que proporcionar esta información supondría un menoscabo de los intereses económicos y comerciales de la empresa propietaria de la documentación.

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

Madrid, fecha de firma electrónica.
EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA,
Valentín Almansa Lara.